



Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Guatemala 30 de noviembre de 2011


Licenciada
Ana Isabel Antillón
Dirección Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho



Apreciable Señora Directora:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE**, emitido en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el día 31 de octubre del año dos mil once, a la **Iniciativa de Ley número 4322**, que dispone aprobar **LEY DE CUIDADO ALTERNATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CUYOS DERECHOS HAN SIDO AMENAZADOS O VIOLADOS**.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a la Señora Directora las muestras de mi alta estima.


Diputado Oliverio García Rodas
Presidente de la Comisión



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

cc. arch.



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

C

**DICTAMEN No. 15-2011
INICIATIVA 4322**

**INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE CUIDADO ALTERNATIVO DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CUYOS DERECHOS HAN SIDO AMENAZADOS O
VIOLADOS.**

HONORABLE PLENO

ANTECEDENTES

Con fecha cinco de abril de dos mil once el Honorable Pleno del Congreso de la República remitió para su estudio y dictamen a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la iniciativa 4322, presentada por la señora Diputada Zury Mayté Ríos Sosa, que dispone aprobar la Ley de Cuidado Alternativo de la Niñez y la Adolescencia cuyos derechos han sido amenazados o violados.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Se plantea la necesidad de complementar el marco legal existente, estableciendo de manera clara aquellas medidas de cuidado distintas de la institucionalización, que puede brindarse al niño, niña o adolescente amenazado o violentado en sus derechos humanos, con el objetivo de procurar que su cuidado y protección se produzca en una ambiente familiar que permita su desarrollo humano adecuado.

La iniciativa de ley, pretende definir y regular las distintas modalidades de cuidado alternativo para la niñez y adolescencia amenazada y/o violentada en sus derechos humanos; así como las condiciones para su aplicabilidad y, en especial, la condición de temporalidad de las mismas, debiendo el Estado establecer acciones para el fortalecimiento de la familia biológica y si reintegración.

**CONSIDERACIONES DE ORDEN
CONSTITUCIONAL Y LEGAL**

232

[Handwritten signature]



Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 1, establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. En base a este artículo y a los tratados y convenciones firmadas y ratificadas por Guatemala, esta comisión considera de suma importancia que se vele por proteger los derechos humanos de la niñez y la adolescencia; garantizándoles que existan distintas modalidades de cuidado alternativo cuando estos sean amenazados y/o violentados en sus derechos humanos, así como su condiciones de aplicabilidad y temporalidad. Además en su artículo 51 establece que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social.

En base a lo establecido en los artículos citados anteriormente y a los tratados y convenciones firmadas y ratificadas por Guatemala, esta comisión considera de suma importancia que se vele por proteger los derechos humanos de la niñez y la adolescencia; garantizándoles que existan distintas modalidades de cuidado alternativo cuando estos sean amenazados y/o violentados en sus derechos humanos, así como su condiciones de aplicabilidad y temporalidad.

El Estado de Guatemala suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño el veintiséis de enero de mil novecientos noventa, misma que fue aprobada por el Congreso de la República el diez de mayo de ese mismo año. En ésta se proclama la necesidad de educar a la niñez y adolescencia en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, e igualdad, para que como sujetos de derechos se les permita ser protagonistas de su propio desarrollo, para el fortalecimiento del estado de derecho, la justicia, la paz y la democracia.

En virtud de lo anterior, la Comisión considera que la iniciativa de ley objeto de este dictamen, al buscar garantizar los derechos contenidos en los párrafos anteriores, persigue un fin de suma importancia para la niñez y adolescencia guatemalteca, pues alcanza un mayor detalle en la opciones de cuidado que debe brindarse al niño, niña o adolescente amenazado o violentado en sus derechos humanos, logrando el fortalecimiento del marco jurídico en materia de protección a la niñez y adolescencia guatemalteca.



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DICTAMEN

En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas anteriormente, esta Comisión emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la iniciativa **4322** por ser Proyecto de Decreto viable, conveniente y constitucional.

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala, en la ciudad de Guatemala el día treinta y uno de octubre de dos mil once.




Oliverio García Rodas
Presidente

César Augusto Del Águila López
Vicepresidente

Rodolfo Aníbal García Hernández
Secretario

Rosa María Ángel de Frade



Gloria Marina Barillas de Duarte



Jorge Mario Barrios Falla



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C.A.*



Francisco José Contreras Contreras

Gladys Anabella De León Ruiz



Ronnie Danillo Escobar

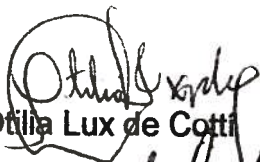


José Alberto Gándara Torrebiarte


Carlos Valentín Gramajo Maldonado



Carlos Enrique López Girón



Otilia Lux de Cotti



Héctor Alfredo Nuila Ericastilla



Mariano Rayo Muñoz



Fredy Viana Ruano



DECRETO No.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que el Estado de Guatemala debe garantizar y mantener a los niños, niñas y adolescentes en el pleno goce de sus derechos y libertades, siendo su obligación proteger la salud física, mental y moral de la niñez y la adolescencia, e impulsar su desarrollo integral

CONSIDERANDO

Que el Estado de Guatemala firmo y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual proclama la doctrina de protección de la niñez y la adolescencia en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad e igualdad para permitirles como sujetos de derechos, ser protagonistas de su desarrollo y, con ello, lograr el fortalecimiento del Estado de Derecho, justicia, paz y democracia.

CONSIDERANDO

Que como consecuencia de dicha ratificación, el Estado ha promulgado la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Ley de Adopciones, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico de protección de la niñez y adolescencia guatemalteca.

CONSIDERANDO

Que en consonancia con la legislación actual y teniendo presente el rol protagónico del Estado de Guatemala en la aprobación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños; se hace necesario desarrollar un marco normativo que contemple de manera más detallada las distintas opciones de cuidado que debe brindarse al niño, niña o adolescente amenazado o violentado en sus derechos humanos.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA

La siguiente:

**LEY DE CUIDADO ALTERNATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CUYOS
DERECHOS HAN SIDO AMENAZADOS O VIOLADOS**

**TÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS DEL CUIDADO ALTERNATIVO**

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley es de orden público y tiene por objeto definir y regular las distintas modalidades de cuidado alternativo para la niñez y adolescencia cuyos derechos humanos han sido amenazados o violados.

Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley. Las modalidades de cuidado alternativo reguladas a través de la presente ley, serán aplicables a todas las personas menores de dieciocho años de edad que se encuentren amenazadas o violadas en sus derechos humanos.

Artículo 3. Principios generales. La aplicación de esta ley deberá tener presente los siguientes principios generales:

- a) **Preeminencia de la familia:** Al ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento, el bienestar y la protección de los niños, todos los esfuerzos estatales y privados deberán estar encaminados principalmente a lograr que el niño permanezca en cuidado y protección en un ambiente familiar. El Estado deberá propiciar apoyo a las familias para facilitar el cumplimiento de su responsabilidad, con el fin de garantizar su relación con el niño.
- b) **Orden de prelación de las medidas de cuidado alternativo.** Las medidas de cuidado alternativo contempladas en la presente ley, se aplicarán bajo el siguiente orden de prelación, salvo que el interés superior del niño exija lo contrario: i) con su familia biológica; ii) con su familia ampliada; iii) con una familia bajo la figura de Acogimiento Temporal y, iv) Acogimiento residencial, únicamente cuando se haya agotado la posibilidad de colocación en las anteriores modalidades de cuidado alternativo. La toma de la decisión sobre un acogimiento alternativo deberá responder al interés superior del niño.
- c) **Tutelaridad.** En consonancia con lo establecido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el derecho de la niñez y adolescencia es un derecho tutelar que les otorga una protección jurídica preferente ante cualquier amenaza o violación de sus derechos humanos.
- d) **Interés superior del niño.** Todas las decisiones que se adopten respecto a las variantes de cuidado alternativo deberán responder a un análisis que considere al menos los aspectos familiares, socioeconómicos, físicos, morales, religiosos, pertinencia cultural y territorial y la perspectiva de género; teniendo siempre en cuenta su opinión en función de su edad y madurez, que permitan determinar la verdadera situación del niño antes de resolver la medida de cuidado alternativo aplicable.



- e) **Retorno a la familia.** La separación del niño de su propia familia debería considerarse como un último recurso y, en lo posible, esta medida debe ser temporal. Una medida de esta naturaleza deberá ser sujeta de un proceso de revisión periódico para establecer si las causas que la motivaron han desaparecido y procurar el retorno del niño a su familia biológica.
- f) **Opinión de la niñez y adolescencia.** Los procedimientos y la aplicación de las medidas de cuidado alternativo de niñez y adolescencia, deberán respetar y hacer efectivo el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta para la determinación de las acciones más adecuadas para la protección de sus derechos.
- g) **Actuaciones en el propio idioma.** Las personas e instituciones responsables de aplicar esta Ley deberán emprender todas las acciones necesarias, para asegurar que todas las diligencias y demás actuaciones se efectúen en el idioma materno del niño o en su caso el de su preferencia.
- h) **Carencia material.** La situación de pobreza o carencia material del niño o de sus padres, no constituye por sí misma razón suficiente para la separación del niño, niña o adolescente de su familia biológica o ampliada.
- i) **No separación de hermanos.** Los hermanos, con vínculos existentes, no deberían ser separados por la aplicación de las medidas de cuidado alternativo, salvo que exista un claro riesgo de abuso u otra justificación en el interés superior del niño. En todo caso se deberá promover que los hermanos mantengan contacto, a menos que ello sea contrario a sus deseos o intereses.
- j) **Contacto familiar.** Debe procurarse que, durante la aplicación de las medidas de cuidado alternativo contempladas en la presente ley, el niño, niña o adolescente mantenga comunicación y contacto con su familia, así como con otras personas próximas, tales como amigos, vecinos y cuidadores anteriores, siempre que no sea contrario al interés superior del niño. Así como debe tener acceso a información sobre la situación de los miembros de su familia ante la ausencia de contacto con los mismos.

Artículo 4. Reconocimiento de derechos. En la aplicación de la presente ley, todas las instituciones públicas y privadas deberán tener presentes todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, Convención de los Derechos del Niño, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Ley de Adopciones.

Sin embargo, los derechos y garantías otorgados a la niñez y adolescencia contenidos en las leyes e instrumentos internacionales señalados en el párrafo anterior, no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ellos o en la presente ley son inherentes a los niños, niñas y adolescentes.



Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

- a) **Medidas de cuidado alternativo.** Son todas aquellas acciones destinadas a brindar cuidado y protección a los niños, niñas y adolescentes, cuando por circunstancias excepcionales éstas no puedan ser brindadas por sus padres.
- b) **Familia biológica.** Es el núcleo familiar integrado por los padres y hermanos del niño, niña o adolescente amenazado o violado en sus derechos humanos.
- c) **Familia ampliada.** Es aquella que comprende a todas las personas que tengan parentesco por consanguinidad o por afinidad, dentro de los grados reconocidos por la Ley, con el niño, niña o adolescente amenazado o violado en sus derechos humanos, que no sean sus padres o hermanos; y a otras personas que mantengan con él una relación equiparable a la relación familiar de acuerdo a la práctica, usos y costumbres nacionales y comunitarias.
- d) **Familia de acogimiento temporal.** Es aquella familia que ha manifestado su deseo de apoyar, sin fines de adopción, al sistema de protección de la niñez y adolescencia, brindando un espacio y ambiente familiar de acogimiento temporal en su propio hogar a un niño, niña o adolescente amenazado o violado en sus derechos humanos; debidamente acreditada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.
- e) **Instituciones de Protección y Abrigo.** Son las entidades nacionales o internacionales, de carácter público o privado autorizadas conforme a la ley, destinadas a brindar servicios de acogimiento residencial consistentes en: protección, cuidado, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria especializada a los niños, niñas y adolescentes amenazados o violados en sus derechos, propiciando su recuperación integral.
- f) **Proyecto de recuperación personal – social:** Es el conjunto de acciones organizadas y planificadas que se realizan de forma individualizada a favor de un niño, niña y adolescente durante el desarrollo de la medida de cuidado alternativo, con el objeto de: i) Garantizarle las condiciones necesarias para el desarrollo integral de sus capacidades, brindándole las herramientas y oportunidades adecuadas a su edad, género y cultura, prestando especial atención a las secuelas generadas de los derechos violados; ii) Garantizarle las condiciones necesarias para asegurar que las acciones u omisiones que vulneraron sus derechos no vuelvan a repetirse; iii) Garantizarle las condiciones necesarias para asegurar que la reintegración familiar constituya una medida permanente y segura para el niño, niña o adolescente, y; iv) Garantizarle que el niño involucrado en un proceso legal cuente con el acompañamiento y asesoría profesional para asegurar su estabilidad emocional.

CAPÍTULO II MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Artículo 6. Relación parental. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República tiene la responsabilidad de diseñar, coordinar e implementar las políticas y programas tendientes a apoyar a la familia que le permitan a ésta, dar cumplimiento a sus fines especialmente en lo relativo al cuidado y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Dichas políticas deben tener presente, en especial, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a mantener una relación estable y sana con sus padres.

Artículo 7. Programas de apoyo. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, en el marco de su mandato como ente responsable de brindar medidas de protección a la niñez vulnerada en sus derechos, deberá poner en marcha programas de apoyo dirigidos a la familia. Éstos fomentarán la conciencia, las aptitudes, las capacidades y las herramientas que le permita a la familia proveer debidamente la protección, el cuidado y el desarrollo de la niñez.

Estos programas deben comprender como mínimo lo siguiente:

- a) **Servicios de prevención del abandono de niños.** Entre los que se debe comprender programas de detección de casos de alto riesgo de abandono o separación.
- b) **Servicios de mejora del entorno familiar.** Entre los que se debe comprender programas de educación parental, el fomento de las relaciones positivas entre padres e hijos, mecanismos y técnicas de solución de conflictos, oportunidades de empleo y generación de ingresos, y asistencia social.
- c) **Servicios de apoyo social.** Entre los que se debe contemplar centros de cuidado diario, mediación y conciliación, tratamiento de la toxicomanía, servicios para los padres e hijos con alguna necesidad especial o personas que viven con el Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida. En el diseño y ejecución de estos programas debe procurarse el involucramiento activo de las familias que conforman la comunidad.

Estos programas serán desarrollados y coordinados a nivel departamental por las Oficinas de Protección a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Deberá contarse con una Oficina por Departamento y cada una contará al menos con un psicólogo, un trabajador social y un abogado, quienes serán los responsables de poner en marcha dichos programas.

Se faculta a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República para que realice convenios de cooperación técnica y financiera con organizaciones no gubernamentales y con las municipalidades de todo el país, con el propósito de



asegurar que dichos programas estén presentes en todas las comunidades y municipios de Guatemala.

Artículo 8. Coordinación. Para el desarrollo de los programas indicados en el artículo anterior, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República deberá coordinar las acciones necesarias, con los diversos Ministerios y/o dependencias del Estado atendiendo a la naturaleza de cada una de éstas.

Artículo 9. Apoyo a padres y madres solteras. Las políticas y programas de apoyo diseñados por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República deberán contemplar también, servicios y atención a padres y madres solteras, priorizando la atención a adolescentes con hijos.

TÍTULO II DEL CUIDADO ALTERNATIVO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 10. Cuidado alternativo. Constituye éste toda medida de protección y cuidado brindada a un niño, niña o adolescente cuyos derechos han sido vulnerados y tiene el propósito de brindarle protección en un entorno familiar, ya sea éste en la propia familia biológica, en la familia ampliada, en una familia en Acogimiento Temporal, y en casos excepcionales en acogimiento residencial.

Artículo 11. Aplicación de Medidas de Cuidado Alternativo. Las medidas de cuidado alternativo serán ordenadas por un Juez de Paz o Juez de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia considerando el interés superior del niño y las circunstancias de cada caso concreto. Los Jueces de Paz y de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia están facultados para dictar, entre otras, las siguientes medidas:

- a) El cuidado temporal del niño, niña y adolescente a cargo de su familia biológica;
- b) El cuidado temporal del niño, niña o adolescente a cargo de su familia ampliada;
- c) El cuidado temporal del niño, niña o adolescente a cargo de una familia de acogimiento temporal;
- d) El cuidado temporal del niño, niña o adolescente en acogimiento residencial;

Para el caso de la niñez menor de tres años de edad o niñez con discapacidad, únicamente serán aplicables las medidas contempladas en las literales a), b) y c) del presente artículo; salvo que el interés superior del niño amerite una intervención de acogimiento residencial especializado.

Dichas medidas podrán ser acompañadas de otras que sean necesarias, adecuadas y oportunas para asegurar la efectiva e inmediata protección del niño. Este artículo es



complementario a las medidas establecidas en los artículos 112, 114 y 115 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas medidas podrán ser ordenadas por el Juez de Paz en el marco de las facultades establecidas en el artículo 103 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

Las medidas de protección señaladas en esta Ley y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia no son limitativas sino tienen el carácter de orientativas. El fin primordial de la medida de protección es asegurar que la amenaza a los derechos de la niñez cese y evitar que la violación a los derechos de la niñez continúe en el caso concreto. En consecuencia, la medida debe dictarse inmediatamente después de conocido el hecho y siempre debe orientarse por la protección del interés superior del niño sobre cualquier otro interés.

Artículo 12. Sustitución de la medida. Atendiendo al interés superior del niño y a las circunstancias de cada caso concreto el juez competente podrá, en cualquier momento, de oficio y a solicitud de parte sustituir de forma razonada las medidas dictadas.

Artículo 13. Temporalidad de la medida. Las medidas de cuidado alternativo contempladas en la presente Ley tienen el carácter de temporal, no pudiendo exceder la duración de las mismas de un plazo de seis meses desde el momento de haberse decretado.

Sin embargo el plazo antes indicado podrá extenderse a solicitud de cualquiera de las partes, si por las circunstancias especiales del caso concreto y en atención al interés superior del niño se estima conveniente. En este caso el Juez de Niñez y Adolescencia desarrollará una audiencia de revisión de medidas con la presencia de la Procuraduría General de la Nación y las partes involucradas.

En el caso de las medidas de protección de acogimiento residencial, la extensión de plazo de seis meses constituye la excepción y únicamente podrá concederse cuando se pruebe que se han agotado las posibilidades de colocación del niño en su familia biológica, familia ampliada o en una familia en acogimiento temporal, o cuándo por las circunstancias especiales del caso concreto así lo exija el interés superior del niño.

En ningún caso la aplicación de las medidas contempladas en la presente ley podrá exceder el plazo de un año. Sin embargo, en casos excepcionales a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ser aprobada su ampliación por un plazo mayor mediante resolución de la Cámara que la Corte Suprema de Justicia designe, emitida a través del procedimiento de los incidentes. En dicha resolución deberá indicar el tiempo concreto de la prórroga excepcional y las medidas necesarias para que se acelere el trámite del proceso judicial.

Artículo 14. Procedimiento de aplicación. Las modalidades de cuidado alternativo establecidas en la presente Ley se conciben como medidas cautelares, y se aplicarán de conformidad con el procedimiento de las medidas de protección para la niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos, contemplado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.



A fin de determinar la forma más adecuada de cuidado alternativo, el niño y sus padres o tutores deberían estar plenamente informados sobre las opciones de cuidado alternativo disponibles, las implicaciones de cada opción, y sus derechos y obligaciones en el asunto.

La preparación, aplicación y evaluación de una medida de protección para un niño debería ser efectuada, en la máxima medida posible, con la participación de sus padres o tutores y potenciales padres acogedores y cuidadores, con respecto a las necesidades particulares, convicciones y deseos especiales del niño. A pedido del niño sus padres o tutores, otras personas importantes en la vida del niño pueden también ser consultadas en todo proceso de decisión.

Artículo 15. Entorno adecuado. La determinación de la medida de cuidado alternativo aplicable deberá tener en cuenta el ámbito geográfico de su aplicación a efecto de que permita a los niños, niñas y adolescentes sujetos a la medida, participar normalmente de la vida comunitaria y que puedan utilizar todos los servicios que ésta ofrece, en un ambiente previamente conocido.

Artículo 16. Determinación de la Medida. La Procuraduría General de la Nación deberá establecer equipos multidisciplinarios en las delegaciones de la institución. Cada departamento del país en las delegaciones de la institución, con el objetivo de que al momento de tener conocimiento de un caso de amenaza o violación de los derechos humanos de un niño, niña o adolescente, pueda recabar toda la información pertinente al caso concreto para que sea presentada a consideración del juez para la determinación de la medida de cuidado alternativo más adecuada a ser aplicada.

En la resolución que establece la medida de cuidado alternativo aplicable, el Juez deberá fundamentar el motivo por el cual fue seleccionada dicha medida y exponer el razonamiento efectuado para determinar la prelación en su aplicación.

La Procuraduría General de la Nación proporcionará al Juez la información pertinente para que éste pueda tomar su decisión con las consideraciones presentadas por la misma.

Artículo 17. Reintegración familiar y comunitaria. Dado que las modalidades de cuidado alternativo se caracterizan por su temporalidad, debe asegurarse que éstas contemplen mecanismos de reintegración tanto al seno de la familia biológica como a su comunidad. Para esto, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República y/o terceros involucrados, deberán diseñar e implementar los respectivos programas de acompañamiento y seguimiento estableciendo equipos multidisciplinarios para que trabajen en las causas que provocaron la amenaza o el cese de la vulneración de los derechos de la niñez y preparando el entorno familiar del niño para su pronta y segura reintegración.

Estos mecanismos de reintegración deben tener en cuenta el sexo, la edad, la identidad cultural, la madurez y las circunstancias particulares de cada niño, niña o adolescente.



Artículo 18. Niñez con discapacidad. En la aplicación de las medidas de cuidado alternativo contempladas en la presente ley, se debe tener presente que la niñez con discapacidad tiene el derecho a gozar, sin ningún tipo de discriminación, de las medidas contempladas en la presente ley.

Para el efecto, la Secretaría de Bienestar Social de la República tiene la obligación de garantizar a estos niños el acceso a programas de atención especializada y a su inclusión en los programas ordinarios contemplados en las distintas modalidades de cuidado alternativo.

Las autoridades responsables de la aplicación de esta ley, velarán porque los edificios e instalaciones donde se cumplan las distintas modalidades de cuidado alternativo faciliten la comunicación y acceso a la niñez con discapacidad y promoverán su participación activa en el proceso de toma de decisiones que les afecte.

CAPÍTULO II

MODALIDADES DE CUIDADO ALTERNATIVO

SECCIÓN I

FAMILIA AMPLIADA

Artículo 19. Definición de la medida. Constituye ésta el cuidado y protección temporal, establecido en virtud de orden de juez competente, de un niño, niña o adolescente amenazado o violado en sus derechos humanos a cargo de las personas con las que tiene relación de parentesco ya sea por consanguinidad o por afinidad dentro de los grados reconocidos por la ley, que no sean sus padres o hermanos, o en su caso con otras personas que mantengan con él una relación equiparable a la relación familiar de acuerdo a la práctica, usos y costumbres nacionales y comunitarias.

Artículo 20. Objetivo de la medida. El cuidado del niño en una familia ampliada busca brindarle cuidado y protección tratando de proporcionar un entorno familiar conocido que favorezca su protección y desarrollo por un determinado período de tiempo, con el objetivo de que éste pueda retornar al seno de su familia biológica.

Artículo 21. Responsabilidades de la familia ampliada. Los integrantes de la familia ampliada tendrán las siguientes responsabilidades:

- a) Someterse a una evaluación psicosocial;
- b) En general todas las obligaciones de cuidado y protección del niño, niña o adolescente, que corresponden a una familia biológica;
- c) Garantizar al niño, niña o adolescente amenazado en sus derechos humanos, el efectivo goce de todos sus derechos;
- d) En la medida que se le requiera, informar respecto del proceso evolutivo del niño, niña o adolescente colocado bajo su cuidado y protección;



- e) Ejercer la representación legal del niño, niña o adolescente durante todo el período de vigencia de la medida, con el acompañamiento técnico de la Procuraduría General de la Nación;
- f) De acuerdo a la regulación establecida por el juez competente, procurar que el niño, niña o adolescente que se encuentre bajo su cuidado y protección mantenga comunicación y relación con su familia biológica;
- g) Atender los distintos programas de apoyo y orientación al niño, niña o adolescente protegido y colaborar con los equipos multidisciplinarios para el debido cumplimiento de los fines de las tareas asignadas;
- h) Comunicar inmediatamente a las autoridades competentes cualquier situación que ponga en peligro la integridad física o moral del niño a su cargo.
- i) Todas aquellas otras responsabilidades que le asigne el juez competente al momento de dictar la resolución de otorgamiento de la medida.

SECCIÓN II FAMILIA DE ACOGIMIENTO TEMPORAL

Artículo 22. Definición de la medida. Constituye ésta la medida de cuidado y protección temporal ordenada por juez competente, de un niño, niña o adolescente amenazado o violado en sus derechos humanos, a cargo de una familia con la cual el niño no tiene ninguna relación de parentesco ya sea por consanguinidad o por afinidad dentro de los grados reconocidos por la Ley.

Esta medida únicamente podrá aplicarse cuando se compruebe que se ha agotado la posibilidad de colocar el niño bajo la protección de su familia ampliada o cuando así lo exija el interés superior del niño.

Artículo 23. Objetivo de la medida. La protección de un niño en una familia de acogimiento temporal, busca brindarle cuidado y protección tratando de proporcionar un entorno familiar que favorezca el desarrollo del niño por un determinado período de tiempo con el objetivo de que éste pueda estar protegido y superar la causa de la separación de su familia y prepararse para el retorno a la misma en el menor tiempo posible.

De esa cuenta, los integrantes de la familia que brindan el acogimiento temporal no tienen opción de adoptar al niño a su cargo.

Artículo 24. Acreditación de la Familia de Acogimiento Temporal. Para ser catalogada legalmente como Familia de Acogimiento Temporal se debe contar con la acreditación de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, de acuerdo a los requisitos, perfiles y demás condiciones que la Secretaría establezca en el Reglamento específico.

Artículo 25. Perfil mínimo de la familia de Acogimiento Temporal. En todo caso para que una familia pueda ser acreditada para prestar servicios de acogimiento temporal deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

- a) Estar comprendidos entre los veinticinco a sesenta años de edad;
- b) Pareja en matrimonio civil, unión de hecho legalmente declarada o familia monoparental;
- c) Residencia legal y permanente en Guatemala;
- d) Estar en el pleno goce de sus derechos civiles y estar dispuestos a someterse a estudios psicológicos, sociales y médicos; así como la orientación que se estime pertinente;
- e) Carencia de antecedentes penales y policíacos;
- f) Saber leer y escribir y disponibilidad de tiempo;
- g) Ingresos económicos estables y vivienda en condición adecuada;
- h) Tener un máximo de tres hijos no menores de cinco años;

Estos requisitos, los procedimientos y criterios de selección y acreditación deberán ser desarrollados a través del reglamento correspondiente. Asimismo se deberá regular lo relativo al acompañamiento técnico, aporte económico, supervisión y monitoreo de la medida.

Para los efectos de la presente ley, se entenderá como familia monoparental aquella persona soltera que tiene experiencia en el cuidado y atención familiar de niños.

Artículo 26. Autorización de entidades privadas para la promoción de familias de acogimiento temporal. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República podrá delegar las funciones de promoción, captación, selección y acompañamiento de las familias de acogimiento temporal a organizaciones no lucrativas legalmente constituidas en Guatemala y que dentro de sus estatutos contemplen programas de preservación familiar y demuestren experiencia, capacidades técnicas y recursos humanos suficientes y especializados para asumir dicha responsabilidad.

Los mecanismos de acreditación, supervisión, coordinación y monitoreo de las entidades privadas serán desarrollados en un reglamento específico.

En ningún caso dichas entidades están autorizadas para acreditar por sí mismas familias para acogimiento temporal. Esta facultad es exclusiva de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.



Artículo 27. Condiciones del cuidado y protección en un familia de acogimiento temporal. El acogimiento familiar deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- a) Ejecutarse en una familia previamente calificada y acreditada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.
- b) Ejecutarse en una vivienda que, por su ubicación, permita que los niños, niñas y adolescentes sujetos a la medida, participen normalmente de la vida comunitaria y puedan utilizar todos los servicios que ésta ofrece;
- c) Asegurar a los niños, niñas y adolescentes un adecuado proceso de socialización y garantizarles seguridad y estabilidad emocional y afectiva; y,
- d) Garantizar que las relaciones del niño, niña o adolescente acogido se desarrollen en un contexto familiar y sean personalizadas, de forma que se posibilite la construcción de su identidad y el desarrollo de la personalidad.

Artículo 28. Prohibición de lucro. Se prohíbe la obtención de lucro como consecuencia del acogimiento temporal en el seno familiar.

Cada familia podrá acoger un máximo de dos niños, salvo que los mismos fueren hermanos, para lo cual se privilegiara la no separación de los mismos.

Artículo 29. Responsabilidades de la familia de acogimiento temporal. Los integrantes de la familia de acogimiento temporal tendrán las siguientes responsabilidades:

- a) En general todas las obligaciones de cuidado y protección del niño, niña o adolescente, que corresponden a una familia biológica;
- b) Garantizar al niño, niña o adolescente amenazado o violado en sus derechos humanos, el efectivo goce de todos sus derechos;
- c) En la medida que se le requiera, informar respecto del proceso evolutivo del niño, niña o adolescente colocado bajo su cuidado y protección;
- d) Ejercer la representación legal del niño, niña o adolescente durante todo el período de vigencia de la medida, con la asesoría técnica de la Procuraduría General de la Nación;
- e) Atendiendo a lo dictado por el juez competente, procurar que el niño, niña o adolescente que se encuentre bajo su cuidado y protección mantenga comunicación y relación con su familia biológica o ampliada;
- f) Atender los distintos programas de apoyo y orientación para el debido cumplimiento de sus fines, relacionados con el cuidado y protección del niño, niña o adolescente amenazado o violado en sus derechos humanos;

- g) Todas aquellas otras responsabilidades que le asigne el juez competente al momento de dictar la resolución de otorgamiento de la medida.

Artículo 30. Derechos de la Familia de Acogimiento Temporal. La Familia de Acogimiento Temporal, una vez haya sido incorporada al Programa de Familias de Acogimiento Temporal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, gozará de los siguientes derechos y obligaciones:

- a) Deberá recibir cursos de capacitación y formación respecto de su rol de cuidado y protección temporal de niños, niñas y adolescentes violentados en sus derechos humanos;
- b) Conocer previamente los detalles del caso y las circunstancias que motivaron la aplicación de la medida al niño, así como las recomendaciones para abordar de mejor manera el cuidado y la protección.
- c) Percibir un aporte económico mensual, por parte de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República o terceros, durante el período de vigencia de la medida de acogimiento temporal desarrollada;
- d) Recibir acompañamiento especializado, consejería médica, psicológica y social antes, durante y después de la integración del niño a la familia;

Artículo 31. Base de datos. Corresponde a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, la conformación y administración de una base de datos que contenga la información de las familias de acogimiento temporal autorizadas a funcionar como tales y de las instituciones autorizadas para la promoción, selección y monitoreo de las familias.

Dicha base de datos deberá estar disponible al Organismo Judicial y la Procuraduría General de la Nación, para la identificación en cada caso concreto de la familia de acogimiento temporal más adecuada para hacerse cargo del cuidado y protección de un niño, niña o adolescente amenazado o violentado en sus derechos humanos.

SECCIÓN III

SERVICIOS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y ABRIGO

Artículo 32. Definición de la medida. Constituye ésta el cuidado y protección en acogimiento residencial, en virtud de orden de juez competente, de un niño, niña o adolescente amenazado o violado en sus derechos humanos, a cargo de una institución pública o privada que cuente con este servicio y tendrá la responsabilidad de brindar protección, cuidado, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria especializada a los niños acogidos, propiciando su recuperación integral y promoviendo la reintegración familiar.



Artículo 33. Excepcionalidad y transitoriedad de la medida. Atendiendo al interés superior del niño, debe considerarse la medida de acogimiento residencial en una institución de protección y abrigo como la última alternativa, excepcional y transitoria, debiendo el juez considerar previamente las posibilidades de colocación del niño en el seno de una familia ampliada o en familia de acogimiento temporal.

Artículo 34. Autorización. Para poder brindar sus servicios de acogimiento residencial de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos, las instituciones de protección y abrigo de carácter privado deberán contar con la autorización específica que corresponde, emitida por la Procuraduría General de la Nación y cumplir con los requisitos que se les señala en la presente ley.

Las instituciones de protección y abrigo que, obtengan su autorización para brindar servicios de acogimiento residencial a niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos, no podrán brindar este mismo servicio a la niñez y adolescencia declarada en adoptabilidad. La autorización para la prestación de los servicios de acogimiento residencial a cargo de las instituciones de protección y abrigo tendrá vigencia por dos años, la cual será renovada si se cumplen los requisitos respectivos.

Los jueces únicamente podrán utilizar los servicios de acogimiento residencial en Instituciones públicas o privadas, que estén debidamente acreditadas para prestar este servicio. Los jueces deberán notificar el ingreso y egreso de un niño en acogimiento residencial a la autoridad competente, para el efecto de que se cuente con una base de datos actualizada a nivel nacional de la niñez institucionalizada.

Bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de información que pueda recibir o solicitar, el Juez de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia que ordene la protección de un niño en acogimiento residencial deberá por sí mismo, o a través de Juez de Paz competente, realizar visita de supervisión y monitoreo a la institución de protección y abrigo en que se encuentra el niño protegido. El Juez deberá acompañarse de equipo multidisciplinario.

Durante la visita el Juez verificará: a) Que se está cumpliendo con el proyecto personal – social de vida del niño; b) Los programas que atienden al niño; y, c) Las condiciones físicas y psicológicas del niño y de la Institución de Protección y Abrigo. Al finalizar la visita el Juez faccionará un acta en la que dará recomendaciones a la institución, copia de esta acta se remitirá a la autoridad central responsable de la supervisión y registro de esta clase de entidades. Esta información deberá constar en el sistema de registro del caso. La misma obligación le corresponde a la Procuraduría General de la Nación, quien deberá tener presencia y supervisión periódica de la situación del niño protegido en acogimiento residencial.

Artículo 35. Requisitos de autorización. Para obtener la respectiva autorización de funcionamiento contemplada en el artículo 34 de la presente ley, las instituciones de protección y abrigo de carácter privado deberán, cumplir con los siguientes requisitos:



a) Fotocopia legalizada de los siguientes documentos:

- a.1) Escritura de constitución debidamente registrada de conformidad con la legislación guatemalteca, en el cual conste como fin principal de constitución, el cuidado, protección y abrigo de niñez y adolescencia;
- a.2) Acta Notarial del nombramiento de Representante Legal, debidamente inscrita;
- a.3) Reglamento Interno de Funcionamiento;
- a.4) Nómina de empleados y cargos desempeñados
- a.5) Programa de capacitación, actualización y especialización, dirigido al personal que labora en la institución;
- a.6) Política en materia de respeto a la confidencialidad y manejo de la información de cada niño, niña o adolescente y su difusión a los empleados de la institución.

b) Informe detallado que contenga lo siguiente:

- b.1) Características generales de la infraestructura de la entidad, acompañando fotografías de todos los ambientes;
- b.2) Capacidad instalada, tipo de población a atender con rangos de edad, perfiles del personal, detalle de programas específicos de atención y organigrama de la entidad.
- b.3) Capacidad financiera para desarrollar sus actividades.
- b.4) Política en materia de contratación, selección y evaluación del personal a laborar en la institución.

c) Otros requisitos que determine la Procuraduría General de la Nación, en el reglamento correspondiente.

Artículo 36. Responsabilidades de las instituciones de protección y abrigo que brindan servicios de acogimiento residencial. Las instituciones de protección y abrigo que brindan servicios de acogimiento residencial, públicas y privadas, tienen las siguientes obligaciones y responsabilidades:

- a) Llevar un sistema único de registro de ingresos y egresos de niños, niñas y adolescentes. Debiendo notificar inmediatamente a la Procuraduría General de la Nación el ingreso, salida o cualquier otra circunstancia que afecta la situación del niño en la institución. Únicamente se ingresarán niños para protección cuando se cuente con orden judicial.



- b) Atender a los niños, niñas y adolescentes conforme a los estándares de calidad establecidos por la autoridad responsable. La institución no podrá albergar más niños del número máximo de población habilitada y permitida por la autoridad competente.
- c) Establecer y actualizar un expediente por cada niño que abrigue, con el objeto de llevar un control estadístico, médico, psiquiátrico, escolar, judicial, social y económico de los mismos. Dicho expediente deberá contar con los documentos de identificación e información personal. Cuando el niño, niña o adolescente ingrese a programas de adopciones, el expediente en original será remitido al Consejo Nacional de Adopciones guardando copia del mismo.
- d) Diseñar de manera individual y en un plazo no mayor de diez días, el proyecto de recuperación personal – social para los niños, niñas y adolescentes que ingresen a la Institución.
- e) Las instituciones de acogimiento residencial deberán garantizar, fomentar, promover y facilitar, por cualquier medio el contacto del niño con su familia de origen, vecinos, amigos, padrinos y otras personas próximas al niño, niña o adolescente, siempre que favorezcan su desarrollo y lo permita su interés superior.
- f) Todos los niños, niñas y adolescentes a los que se refiere la presente ley deberán tener actividades culturales, de esparcimiento, entretenimiento, recreativas y deportivas; dentro y fuera del contexto de protección, estimulando y favoreciendo el contacto con niños y otras personas de la comunidad.
- g) Los niños, niñas, y adolescentes recibirán los tratamientos y la orientación que les prepare para adaptarse al medio social en el cual se desenvolverán. Igual orientación recibirán los padres o encargados.
- h) El egreso definitivo del niño, niña o adolescente se anotará en el Registro de Egresos de las Instituciones de Acogimiento Residencial; así mismo se anotará el nombre de la persona responsable o representante legal que lo recibe y la autoridad de la institución de protección y abrigo que lo entrega. En el caso de menores de edad extranjeros se anotará el nombre de la autoridad que lo reciba.
- i) Denunciar a la autoridad correspondiente todos los delitos y faltas que ocurran en contra de los niños, niñas y adolescentes dentro de la Institución.
- j) Cada Institución, deberá contar con un equipo multidisciplinario y con pertinencia cultural con el fin de cumplir con su objeto y funciones. Así mismo podrá apoyarse de los recursos comunitarios para facilitar la integralidad en la atención.
- k) Realizar las gestiones necesarias y de forma inmediata ante las instituciones correspondientes, para que el derecho a la identidad y registro del niño, niña o adolescente sea efectivo.



- l) Contar y ejecutar programas de capacitación, actualización y especialización, dirigidos al personal que labora en la institución, así como con un código de conducta para la actuación del personal y uno de convivencia armónica dirigido a regular las relaciones entre el personal y los niños y entre éstos últimos;
- m) Notificar a la Procuraduría General de la Nación y a los jueces que tienen la jurisdicción de los casos de los niños protegidos, en un plazo mínimo de un mes de anticipación, sobre el cambio de dirección de domicilio de la residencia de acogimiento;
- n) En caso de enfermedad grave o lesiones graves del niño protegido deberá notificarse inmediatamente al juez a cargo del proceso, a la Procuraduría General de la Nación y a la familia conocida del niño.
- o) En caso de fallecimiento de un niño protegido, el Representante Legal de la entidad privada y el Director del programa de acogimiento residencial, bajo su propia responsabilidad, deberán notificar de inmediato al juez a cargo del caso, a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público e Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los efectos de la necropsia y demás peritajes que se estimen pertinentes, a los familiares conocidos del niño y demás autoridades competentes. En todo caso debe practicarse la necropsia del cadáver para establecer fehacientemente la causa del fallecimiento del niño.
- p) Otras funciones que el reglamento emitido por la autoridad responsable determine, así como las que le asigne el juez que haya dictado la medida.

Estas mismas disposiciones son aplicables a aquéllos programas de acogimiento residencial administrados por el Estado.

Artículo 37. Casos excepcionales. En casos excepcionales, cuando la vida o la integridad del niño, niña o adolescente se encuentren en inminente riesgo, la institución de protección y abrigo pública o privada, deberá protegerlo sin orden judicial, pero en este caso el director deberá gestionar la orden judicial y medida de protección pertinente de forma inmediata.

Artículo 38. Supervisión y Monitoreo. Las instituciones de protección y abrigo con servicios de acogimiento residencial, públicas y privadas, deberán ser sujetas a un proceso periódico de supervisión y monitoreo para determinar si en el desempeño cumple con los estándares de calidad adecuados. Dichas actividades de supervisión y monitoreo deberán realizarse como mínimo una vez al año, para lo cual la autoridad responsable podrá coordinar con otras dependencias estatales los apoyos que estime necesarios.

En caso que la Procuraduría General de la Nación detecte el incumplimiento de los estándares de calidad pertinentes, podrá ordenar la protección del niño y el cierre de la institución y la certificación de lo conducente al Ministerio Público, en caso se detecte la posible comisión de un hecho delictivo.

SECCIÓN IV

DEL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DECLARADA EN ADOPTABILIDAD

Artículo 39. Institución responsable. El desarrollo, supervisión y monitoreo de las medidas de protección y abrigo de la niñez y adolescencia declarada en adoptabilidad, corresponde al Consejo Nacional de Adopciones para lo cual deberá estarse a lo preceptuado en la Ley de Adopciones.

Artículo 40. Instituciones de Protección y Abrigo. Las instituciones de protección y abrigo privadas, que deseen brindar servicios de acogimiento residencial de niños y adolescentes declarados en adoptabilidad, deberán contar con la respectiva autorización emitida por el Consejo Nacional de Adopciones, para lo cual deberá estarse a lo establecido en la Ley de Adopciones.

Artículo 41. Prohibición. Las instituciones de protección y abrigo, que obtengan la autorización para brindar servicios de acogimiento residencial de niños y adolescentes declarados en adoptabilidad, no podrán desarrollar paralelamente programas de acogimiento residencial de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos.

Artículo 42. Procedimiento de autorización y registro. Todo lo relacionado al procedimiento de autorización y registro de instituciones privadas, que deseen brindar servicios de acogimiento residencial a niños o adolescentes declarados en adoptabilidad, se regirá de conformidad a lo dispuesto en el capítulo II del Título II de la Ley de Adopciones.

Artículo 43. Estándares de calidad. Adicionalmente a los requisitos y requerimientos que el Consejo Nacional de Adopciones establezca para la prestación de los servicios de acogimiento residencial a niños o adolescentes declarados en adoptabilidad, las instituciones de protección y abrigo deberán cumplir con estándares de calidad que contemplen como mínimo los siguientes aspectos:

- a) Evaluación biopsicosocial y proyecto de vida;
- b) Plan de Vida;
- c) Situación Legal;
- d) Acogida de Hermanos;
- e) Admisión del niño;
- f) Relación con la familia de origen;

- g) Apoyo comunitario;
- h) Personal adecuado;
- i) Infraestructura y equipamiento;
- j) Saneamiento y seguridad;
- k) Salud;
- l) Educación escolar y formación laboral;
- m) Juego y ocupación del tiempo de ocio;
- n) Niños con necesidades especiales;
- o) Finalización de la acogida y seguimiento.

El Consejo Nacional de Adopciones deberá definir el contenido de cada uno de los estándares antes indicados. Adicionalmente, en el ejercicio de sus funciones podrá modificarlos y/o definir otros estándares de conformidad con el interés superior del niño.

SECCIÓN V

DISPOSICIONES COMÚNES DEL CUIDADO ALTERNATIVO

Artículo 44. Fortalecimiento de la familia biológica. Atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, mientras dure la medida de protección, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República por sí misma, o a través de terceros acreditados, deberá desarrollar con los integrantes de la familia biológica del niño, niña o adolescente protegido, las siguientes actividades:

- a) Identificar las decisiones, acciones y factores que afectan o puedan afectar los derechos humanos del niño, niña o adolescente colocado en una medida de cuidado alternativo;
- b) Determinar los aspectos generales en los que la familia biológica debe cambiar para mejorar las relaciones al interior de la familia;
- c) Determinar los aspectos educativos, emocionales, físicos, psicológicos y afectivos que deben impulsarse para el crecimiento y desarrollo integral del niño, niña o adolescente y apoyar su ejecución;

Todos estos aspectos deben quedar establecidos en el plan de reintegración familiar y deben contener un programa de actividades, sistema de monitoreo y un plazo razonable de cumplimiento de acuerdo a las particularidades de cada caso concreto.



Artículo 45. Responsabilidad de la familia biológica. Los integrantes de la familia biológica del niño, niña o adolescente amenazado o violado en sus derechos humanos tienen las siguientes responsabilidades:

- a) Participar y cooperar en la identificación de las decisiones, acciones y factores que afectan los derechos humanos del niño, niña o adolescente colocado en una medida de cuidado alternativo;
- b) Participar en la determinación de los aspectos generales en los que debe cambiar para mejorar las relaciones al interior de la familia, y contribuir para su cumplimiento;
- c) Participar en la determinación y ejecución de los aspectos educativos, emocionales, físicos, psicológicos y afectivos que deben impulsarse para el crecimiento y desarrollo integral del niño, niña o adolescente y apoyar su cumplimiento;
- d) Contribuir económicamente, según sus posibilidades, a la manutención del niño, niña o adolescente colocado en una medida de cuidado alternativo, y;
- e) Atendiendo a la naturaleza del caso concreto y si el juez no dispone algo distinto, mantener las referencias, vínculos, visitas y atenciones con relación a su hijo, hija o familiar colocado en una medida de cuidado alternativo.

Artículo 46. Derechos específicos del niño, niña o adolescente. Adicionalmente a todos los derechos humanos que puede gozar, el niño, niña o adolescente amenazado o violado en sus derechos humanos, todo niño separado de su familia tendrá los siguientes derechos específicos:

- a) Ser informado de la naturaleza de la medida de protección y expresar su opinión para el desarrollo de la misma, según su desarrollo evolutivo;
- b) Contar con asesoría y acompañamiento psicológico, social y jurídico, al cual deberá tener acceso sin ningún tipo de limitación ni restricción.
- c) Contar con un mecanismo simplificado, imparcial y eficaz para denunciar cualquier amenaza o violación a sus derechos durante el tiempo en que esté vigente la medida de cuidado alternativo.
- d) Recibir de las personas que lo protegen y cuidan, atención individualizada, profesional, adecuada y especializada con estricto apego a la Ley y en el marco de una actuación respetuosa de los derechos humanos;
- e) Participar en la ejecución del proyecto de recuperación personal – social;



- f) Tener acceso a la educación formal, no formal, y profesional conforme a sus derechos, en la máxima medida posible en establecimientos educativos dentro de la comunidad local.
- g) A satisfacer las necesidades de su vida religiosa y espiritual. Debe tener el derecho a recibir visitas de un representante calificado de su religión como también el derecho de decidir libremente participar o no en oficios religiosos, en la educación religiosa o a la orientación religiosa. Debe respetarse el origen religioso propio del niño, y no se debería animar ni persuadir a ningún niño para que cambie su orientación religiosa durante su cuidado alternativo
- h) Mantener comunicación y contacto con su familia, así como con otras personas próximas, tales como amigos, vecinos y cuidadores anteriores, siempre que no sea contrario al interés superior del niño. Así como tener acceso a información sobre la situación de los miembros de su familia ante la ausencia de contacto con los mismos.
- i) A que las autoridades administrativas y judiciales, públicas y privadas a cargo de su protección y cuidado tomen medidas apropiadas para asegurar que el niño en cuidado alternativo no sea estigmatizado durante o después de su estancia en cuidado alternativo. Esto debe incluir esfuerzos para minimizar la identificación del niño como alguien que se encuentra bajo cuidado alternativo.
- j) A que el uso de la fuerza y restricciones de cualquier naturaleza, se aplique solamente cuando resulte estrictamente necesario para proteger su integridad física o psicológica o la de otras personas, de conformidad con la Ley y de una manera razonable y proporcionada, y respetando los derechos fundamentales del niño. Las restricciones mediante uso de sustancias psicoactivas o medicación deberán fundamentarse en las necesidades terapéuticas y nunca deberán emplearse sin evaluación y prescripción por un especialista. En todo caso debe dejarse constancia en el expediente del niño y notificarse a las autoridades de la institución.

En los casos de comisión de un hecho que pueda constituir delito o falta, deberá ponerse en conocimiento de las autoridades competentes.

Artículo 47. Prohibiciones. A las personas o instituciones responsables de la protección y cuidado de un niño en familia ampliada, en familia de acogimiento temporal o en una institución de acogimiento residencial les queda expresamente prohibido lo siguiente:

- a) Utilizar al niño, niña o adolescente en actividades de servidumbre;
- b) Utilizar al niño, niña o adolescente en actividades de explotación sexual o laboral, o cualquier otra actividad que impida, limite o restrinja el derecho del niño a participar en las actividades propias de su proyecto de recuperación personal - social;



- c) Imponer y ejecutar sanciones o medidas disciplinarias de gestión del comportamiento que sean violatorias de los derechos humanos o que constituyan tortura, tratamiento cruel, inhumano o degradante, incluyendo el castigo corporal, reclusión o aislamiento o cualquier otra sanción que pueda comprometer la salud física o mental del niño, éstas están estrictamente prohibidas.
- d) Delegar a persona distinta la responsabilidad de cuidado y protección del niño, niña o adolescente amenazado o violentado en sus derechos humanos;
- e) Cambiar de dirección de domicilio, sin el previo aviso y autorización del juez que haya dictado la medida, y previa notificación a la autoridad competente y a la Procuraduría General de la Nación;
- f) Para el caso de las medidas de familia ampliada y familia de acogimiento temporal, ausentarse del país, con o sin el niño, niña o adolescente sometido a su cuidado, sin contar con la autorización del juez que haya dictado la medida;
- g) Otras que establezca el juez que dictó la medida;

Artículo 48. Defensoría de la Niñez. La Defensoría de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos está facultada para realizar las supervisiones y monitoreos que estime pertinentes, a todas las medidas de cuidado planteadas en la presente ley tanto de niñez amenazada o violada en sus derechos humanos, como de la niñez declarada en adoptabilidad, de conformidad con el mandato que le asigna la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Para el efecto deberá conformar un equipo multidisciplinario especializado el cual deberá realizar supervisiones sistemáticas a las personas o instituciones responsables de ejecutar las medidas de protección. De cada supervisión deberá realizar el informe respectivo y en caso de detectar algún incumplimiento a la presente Ley y sus reglamentos, enviará dicho informe a la Procuraduría General de la Nación o al Ministerio Público para lo que corresponda.

SECCIÓN VI INSTITUCIONALIDAD RESPONSABLE

Artículo 49. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, como órgano administrativo encargado de la formulación, coordinación y fiscalización de las políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia, así como la administración y ejecución de los programas de bienestar social a favor de la familia y grupos vulnerables y por ende, siendo el ente rector en esta materia velará por la correcta aplicación de la presente ley tomando en cuenta que, su objetivo esencial es el desarrollo de los procesos de formulación, planificación, dirección, ejecución y evaluación de políticas y programas dirigidos a la niñez y adolescencia, y la ejecución



de programas a favor de la mujer, la familia y la comunidad, promoviendo la participación ciudadana y el desarrollo de la familia y de los grupos vulnerables.

Artículo 50. Institución responsable. Corresponde a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República la creación, diseño, administración, monitoreo y supervisión de los programas de familias ampliadas y familias de acogimiento temporal establecidas en esta Ley, así como las establecidas en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

TÍTULO III

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 51. Cuidado alternativo de un niño, niña o adolescente guatemalteco en el extranjero. La presente Ley debe ser plenamente respetada por todas las entidades públicas y privadas y todos aquellos involucrados en la gestión del traslado de un niño guatemalteco, cuyos derechos han sido violados y que se encuentra no acompañado o separado de sus padres, para su cuidado a otro país ya sea para tratamiento médico, reunificación familiar o por motivos de protección a su integridad física.

Artículo 52. Cuidado alternativo de un niño, niña o adolescente proveniente del extranjero. Corresponde a la Procuraduría General de la Nación en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República a través de la Subsecretaría de Cuidado Alternativo, y terceros involucrados, coordinar las acciones que sean necesarias para asegurarse que el cuidado alternativo a un niño, niña o adolescente extranjero que se encuentra en situación de amenaza o vulneración de derechos se realice en el marco de los principios, derechos y garantías establecidos en esta Ley.

Para el efecto, deberá poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores la situación del niño, niña o adolescente, para emprender las acciones de ubicación de su familia biológica en su país de nacimiento y/o procedencia.

El niño no acompañado o separado no deben ser repatriado a su país de residencia habitual si:

- a. Después de la evaluación del riesgo y la seguridad, existen razones para creer que la seguridad del niño o la de su familia corre peligro;
- b. Salvo que, previo a su retorno, un cuidador apto tal como un padre o madre, otro familiar, otro cuidador adulto, una entidad gubernamental, u organización para el cuidado de niños acreditada en el país de origen haya aceptado, y pueda asumir la responsabilidad por el niño y brindarle el cuidado y la protección adecuada;



- c. A menos que, previo a su retorno, también se haya establecido la disponibilidad de apoyo para diseñar e implementar un plan de vida permanente y de integración;
- d. Si, por otros motivos, ello no resultara en el interés superior del niño.

Artículo 53. Cuidado alternativo en situaciones de emergencia. En la medida en que las circunstancias lo hagan posible y teniendo siempre presente el interés superior del niño, las autoridades estatales deberán tener presente el contenido de la presente Ley para la aplicación de medidas de cuidado alternativo a favor de los niños, niñas o adolescentes no acompañados, separados o sin cuidado parental en situaciones de emergencia

Para el efecto, cualquier persona individual o jurídica que brinde apoyo en situaciones de emergencia, al momento de tener conocimiento de un niño, niña o adolescente carente de cuidado parental a consecuencia de la emergencia, deberá comunicarlo inmediatamente a las autoridades competentes para asegurar la protección del niño. En estos casos, deberán girarse las instrucciones pertinentes para la localización de la familia del niño y la reintegración a la familia biológica o ampliada en el menor tiempo posible.

Las organizaciones y autoridades deberán empeñarse por prevenir la separación de los niños de sus padres o cuidadores primarios, a menos que el interés superior del niño lo requiera, y garantizar que sus acciones no promuevan de manera inadvertida la separación familiar, mediante la prestación de servicios y beneficios sólo para los niños más que para las familias.

Artículo 54. Asignación presupuestaria. El Estado de Guatemala deberá asignar a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Organismo Judicial los recursos presupuestarios necesarios que le permitan cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 55. Reglamento de la ley. Dentro de los sesenta días siguientes a la vigencia de la presente ley, el Organismo Ejecutivo deberá emitir el reglamento de la presente ley.

Artículo 56. Reglamentos y Programas especiales. En un plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República deberá crear los programas señalados en esta Ley, emitir y adecuar toda la reglamentación especial necesaria que permita implementar los mismos y aperturar las oficinas departamentales de protección para coordinar las acciones señaladas en esta Ley.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES FINALES



Artículo 57. Del concepto de Familias Sustitutas y Familias de Acogimiento Temporal. En todas las disposiciones legales, reglamentarias y resoluciones administrativas en donde se utilice el concepto de familia sustituta se entenderá que se refiere al concepto de Familias de Acogimiento Temporal y a partir de la vigencia de esta Ley se regulará su funcionamiento de acuerdo a lo establecido en esta normativa.

A los niños, niñas o adolescentes que se encuentren en cuidado bajo el concepto de familias sustitutas por orden judicial o administrativa, se les deberá regularizar su situación y adecuarla a las disposiciones que esta ley señala en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la vigencia de la presente ley. Para el efecto la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia y entidades privadas involucradas deberán coordinar sus acciones para asegurar el cumplimiento de esta disposición bajo su propia responsabilidad.

Artículo 59. Del concepto de Acogimiento residencial y Abrigo Temporal. En todas las disposiciones legales, reglamentarias y resoluciones administrativas en donde se utilice el concepto de Abrigo Temporal se entenderá que se refiere al concepto de Acogimiento Residencial y, a partir de la vigencia de esta Ley, se regulará su funcionamiento de acuerdo a lo establecido en esta normativa.

Artículo 59. Visitas judiciales a niñez en cuidado residencial. En un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, cada uno de los Jueces de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de todo el país deberán elaborar un programa de visitas a la niñez institucionalizada que está a su cargo y lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia para los efectos de asegurar el cumplimiento de esta Ley. Deberán notificar de la ejecución del programa de visitas y su resultado al Consejo Nacional de Adopciones, autoridad central responsable de la autorización y supervisión de entidades públicas y privadas.

Artículo 60. Revisión de la situación de la niñez institucionalizada. En un plazo no mayor de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley, la Procuraduría General de la Nación, el Organismo Judicial, el Consejo Nacional de Adopciones y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República deberán haber finalizado el proceso de revisión individual de los casos de niñas, niños y adolescentes que al momento de entrar en vigencia la presente se encuentren en acogimiento residencial, con el propósito de identificar la medida de cuidado alternativo más adecuada de conformidad con lo establecido en la presente ley. Para el efecto, se dará prioridad a los niños menores de cinco años, niños con discapacidad y aquéllos que tengan un plazo mayor de seis meses de estancia en una institución de acogimiento residencial.

Para el efecto se crea el Comité Nacional de Desinstitucionalización el cual estará coordinado por la Procuraduría General de la Nación y se integrará con las instituciones mencionadas en el párrafo anterior. Este Comité deberá estar integrado en un plazo máximo de treinta días siguientes a la vigencia de la presente ley, debiendo las



máximas autoridades de cada institución designar a un funcionario titular y un suplente del más alto nivel.

Artículo 61. Transitorio. A partir de la vigencia de la presente Ley el Consejo Nacional de Adopciones, en un plazo no mayor de tres meses, deberá remitir a la Procuraduría General de la Nación los expedientes autorizados y los que se encuentren en trámite de las instituciones de protección y abrigo privadas que presten o deseen prestar servicio de acogimiento residencial. El Consejo Nacional de Adopciones únicamente continuará el trámite de instituciones privadas que presten o deseen prestar servicios para niños y adolescentes declarados en adoptabilidad.

Artículo 62. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL _____ DE _____ DEL AÑO _____